

LA SEÑORIALIZACIÓN DE CIUDAD RODRIGO DURANTE EL REINADO DE LOS ÚLTIMOS TRASTAMARAS

ANGEL BERNAL ESTÉVEZ

1. INTRODUCCIÓN

Ciudad Rodrigo obtuvo desde fecha temprana privilegio de jurisdicción realenga, que mantuvo durante casi dos siglos, hasta que el monarca Juan II la ofreció en señorío a su esposa la reina Doña María. Hasta ese momento -año 1442- todos los monarcas anteriores desde Alfonso X, que concede el primer privilegio, habían jurado respetar su condición realenga¹, y el mismo Juan II lo había hecho unos años después de ocupar el trono². Esta ruptura del compromiso abriría la brecha de sucesivas donaciones, de manera que, antes de terminar el siglo, la ciudad pasó intermitentemente por cuatro manos en todos los reinados que lo cubren; dos veces violó Juan II el compromiso, una vez lo hizo Enrique IV y otra Isabel I, todos ellos habían confirmado el privilegio al comienzo de sus respectivos reinados.

Antes de seguir adelante, conozcamos algunos datos sobre la ciudad.

Su situación geográfica, con alto valor estratégico respecto a la Meseta Sur y a Portugal, fue la razón decisiva para que Fernando II de León llevara a cabo su repoblación definitiva y se erigiera en su benefactor.

No tendría ningún interés para este trabajo remontarnos al momento de su nacimiento como ciudad si no fuera porque su posición fronteriza será determinante para su futuro, al hacer de tapón entre la Meseta Norte castellana y el reino portugués y donde su fidelidad podría resultar de esencial interés en un conflicto bélico entre ambos reinos, como pudo demostrarse en el ascenso al trono de Enrique II en que la ciudad se entregó al rey portugués, obligando al Trastámara a su asedio militar para retornarla a su Corona, y como se volvió a demostrar nuevamente en la guerra civil castellana que aseguró en el trono a Isabel I, que necesitó cuatro meses desde su coronación y varias tentativas negociadoras para obtener su favor, lográndolo sólo a cambio de la confirmación de sus privilegios³ (Bernal, 1981: 24-50).

¹ Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo (A.M.C.R.), leg. 284, doc. 27 b s/f. En este documento de respuesta a la enajenación real, la ciudad le recuerda su privilegio.

² A.M.C.R., leg. 284, doc. 15,8-Ag.-1.417, Burgos. Confirmación de los privilegios de la ciudad, otorgados y confirmados por sus antecesores.

³ Sobre la importancia de su posición estratégica en función de los conflictos entre Castilla y Portugal, véase :

Bernal Estévez, A: *Ciudad Rodrigo en la Edad Media*. Salamanca, 1981.

Bernal Estévez, A: *El concejo de Ciudad Rodrigo y su tierra durante el siglo XV*. Diputación Provincial,

El interés de la Corona por la posesión de la ciudad podría explicarse desde esta óptica de enfrentamiento militar que caracterizó a los reinos de Castilla y Portugal durante la B.E.M., que le confiere un valor estratégico mucho máspreciado que lo que la ciudad, desde el punto de vista humano, económico y fiscal representaba, pues la extensión de su alfoz no era muy grande (unos 3.500 Km. cuadrado), su economía de base abrumadoramente agraria y su interés fiscal escaso, dada la debilidad de su población, que en el momento de la señorialización ascendía a unos 1.500 vecinos para todo el territorio⁴ (una densidad aproximada de 0,4 v/ km cuadrados), y a unos 500 para la ciudad⁵. (Bernal, 1990: 232).

La idiosincrasia guerrera forjada en una historia secular de amenaza, peligro y enfrentamiento bélico, produjo en la ciudad unas relaciones sociales basadas en el prestigio y acaparamiento de los poderes por varias familias muy influyentes, agrupadas en dos linajes, frecuentemente enfrentados entre sí para dilucidar su hegemonía en el gobierno municipal, y que arrastró detrás un clientelismo que dividió en dos bandos a las fuerzas más dinámicas de la ciudad, constituidas por un crecido número de hidalgos y caballeros.

La monopolización de los oficios públicos, que ya se ha dado aquí por supuesta, se produjo en fechas muy tempranas del reinado de Alfonso XI, 1327 y 1328 respectivamente, a medias partes entre los linajes más poderosos que dominan la vida ciudadana, Garcí-López y Pacheco, lo que de hecho constituyó la patrimonialización de los mismos en estas familias, que al menos hasta mediados del s. XV dispusieron de ellos a su antojo (Bernal, 1981: 84 ss.).

Esta posición social y política de privilegio que detentaron ambos linajes, acompañados en un plano inferior de un cortejo de familias hidalgas, tenía su afirmación en una sólida posición económica de base territorial, conseguida por donaciones reales o usurpaciones de propiedades comunales, que en el caso de los Pacheco desembocó en el Marquesado, ya en el s. XVI⁶ (Bernal, 1990: 117-136).

Así pues, los grupos dirigentes de la ciudad basaban su poderío y dominio sobre la misma en el prestigio social, la monopolización de los cargos públicos y una firme posición económica.

Este era el retrato aproximado de la ciudad en el momento de producirse la primera donación señorial en 1442.

2. LAS CONCESIONES DE SEÑORÍO

2.1. EL PRIMER SEÑORÍO

Tiene lugar el 4 de mayo de 1.442 según sendas cartas despachadas por el rey en Valladolid, dirigidas una a la reina y otra a la ciudad, comunicando la donación⁷.

Salamanca, 1990: 39 ss.

⁴A.M.C.R., leg. 284, doc. 27b s/f (Del contexto se deduce entre / 1.442 y 1.444).

⁵Para la ciudad no hay cifras en este momento. El dato es una estimación personal, obtenida de la confrontación de otros datos y referencias en el estudio de la población de la ciudad.

Bernal Estévez, A: Ob. Cit. , 1990.

⁶Sobre las formas de propiedad y explotación de la tierra en Ciudad Rodrigo en el s.XV: Bernal Estévez, A: Ob. Cit., 1.990.

Entre los grandes propietarios figuran representantes de estos dos linajes y de otras familias influyentes de la ciudad.

⁷Figuran los dos con la misma signatura: Leg. 284, doc.244. Uno lleva fecha 28 y el otro 29 de mayo. Se trata en ambos casos de traslados de documentos originales.,

La decisión real tiene su fundamento en una doble permuta en la que participan el rey, la reina y el príncipe D. Enrique, y de la que son protagonistas Ciudad Rodrigo, Molina de Aragón y Guadálajara.

Con retorno de esta última villa a la jurisdicción real ⁸ (Mata, 1946: 367 y 375), el príncipe D. Enrique recibe en compensación la villa de Molina, antigua posesión de la reina⁹, que saldrá beneficiada por la entrega a cambio de Ciudad Rodrigo.

La carta de donación garantizaba a la ciudad su retorno a la Corona, y prohibía la enajenación total o parcial a cualquier particular. La donación se completa con la revocación de cualquier merced o donación efectuada sobre las tierras y jurisdicción de la ciudad, provocando un contencioso con el caballero Ferrand Nieto de El Cubo, que había obtenido en 1440 el señorío sobre las aldeas de Villar de la Vieja y Bañobárez, sitas en el campo del Camaces¹⁰, y que no encuentra solución definitiva hasta varios años más tarde, siendo ya señor de la ciudad el príncipe D. Enrique¹¹.

Definidos los límites de la donación, preocupa ahora al rey establecer las garantías para que el dominio sobre la ciudad sea efectivo, o al menos legal ¿cual era el impedimento?. Sin duda la legalidad, puesto que el rey conoce el privilegio de no enajenación que él mismo había firmado y que sólo podía ser revocado en Cortes. La solución a esta contradicción la encuentra en la autoafirmación de su superior autoridad sobre cualquier otro poder establecido, Cortes incluidas, con que trata de dar legitimación al acto, verdadero alegato de autoritarismo regio¹².

⁸ Mata Carrizo, J: *Crónica de El Halconero de Juan II*, Madrid, 1946. En las págs. 367 y 375 se cita reiteradamente la pertenencia de esta villa al príncipe Don Enrique, año 1441.

⁹ Mata Carriazo, J: *Refundición de la Crónica de El Halconero*. Madrid, 1.940.

Se dice que el año 1.437 la villa de Molina ya era señorío de la reina (p. 216). Sin embargo, en la Crónica de El Halconero (Pedro Carrillo de Huete), el rey urge a la villa a someterse a dicha posesión el año 1.441.

¹⁰ Barrios García, A. y otros: *Documentación Medieval del Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo*, Diputación Provincial, Salamanca, 1.988..

La concesión de este señorío se produce con fecha 20 de Oct. de 1.440. La disputa de estas aldeas entre el caballero y la ciudad, genera una extensa documentación, que se encuentra en el Archivo Municipal, y que ha sido publicada por Barrios, con los núms. 281, 282, 284, 285, 288, 289, 291, 292, 296, 298, 300 y 301.

La reina, señora ya de la ciudad, trató de restituir estas aldeas a su posesión, generándose un procedimiento, cuyos autos se recogen en 7 libros, docs. 23 a 29 del leg. 301 del A.M.

¹¹ Archivo General de Simancas, Patronato Real, nº 5.032, de 20-Oct-1.445: Acta notarial de carta del príncipe D. Enrique, señor de Ciudad Rodrigo, en que afirma a dicha ciudad en la posesión de los lugares de Villar de la Vieja y Bañobárez.

¹² Doc. citado en nota anterior:

"Lo qual todo susodicho... quiero e mando que sea firme e estable para siempre jamás, non enbargante qualesquier Leyes... Los abrogo, alzo e quito... especialmente contra las leyes... que dizen que las cartas dadas contra ley o fuero... deben ser obedesçidas e non cunplidas... e que las leyes, fueros... non pueden ser derogados salvo por Cortes, e mando e defiendo a los del mi Consejo e oydores de la mi Audiencia... que non se entremetan a conosçer nin conscan de pleito nin demanda que vos sea puesto soberrrazón de dicha çibdad... e sy contrá esto alguna cosa fesyeren e indagaren o mandaren o executaren, quiero e mando que pora el mismo fecho aya reydo e sea todo ninguno e de ningún valor e efeto" Y más adelante, como resumiendo todo lo dicho concluye: "Que esta mi carta tentga firmeza de ley... commo sy fuese hecha e promulgada en Corates".

La propuesta de la ciudad se produce en los términos previstos, es decir, la defensa de la legalidad, presente en sus privilegios confirmados, aunque no quedan ahí sus argumentos; por ello envían a Diego García de Chaves y a Esteban Pacheco, regidores y cabezas de los dos linajes dirigentes para que la representen en la Corte y defiendan su condición realenga. Portando los privilegios de la ciudad, exponen al rey las razones¹³, que centran en su valor estratégico, su espacio fronterizo con Portugal a lo largo de 16 leguas, los múltiples conflictos bélicos con aquel reino, los grandes sufrimientos padecidos por ello y su incondicional fidelidad a los reyes castellanos (lo que no era del todo cierto¹⁴ (Bernal, 1981: 43), tratando de mostrar con todo ello la inconveniencia política de su transformación en señorío.

Esta fue la única reacción de la ciudad, reflexiva, pacífica y respetuosa, pero que no logró variar la posición real. ¿Puede tildarse de cándida su actitud, aceptando sin mayor resistencia su señorialización? ¿Cual era el contenido de ésta? La carta de donación recoge una fórmula de señorío jurisdiccional consistente en el monopolio de la justicia local, el cobro de algunos impuestos residuales de origen feudal (martiniegas, yantares, escribanías, portazgos y diezmos), otras rentas y pechos locales y las penas y caloñas, es decir, todos los elementos que constituyen el señorío colectivo del concejo, quedan a disposición del señorío personal de la reina. En la práctica va a quedar reducido a un señorío mediatizado, intermedio entre la superior autoridad real, reteniendo para sí la mayoría de la justicia y los recursos humanos (sus vasallos y lanceros) y económicos (alcabalas y tercias y pedidos y monedas) más importantes¹⁵, y el señorío efectivo del concejo, que mantiene su situación hegemónica, monopolizando el gobierno de la ciudad y las instituciones judiciales entre las familias más poderosas. El señorío efectivo de la reina queda así reducido al cobro de distintos impuestos, unos reales (los de origen feudal) y el resto locales (rentas, pechos y caloñas). No es de extrañar, por tanto, la escasa resistencia que la ciudad (sus dirigentes) opone a esta nueva situación jurídica, toda vez que no influye para nada en su situación interna, al no resultar amenazada la superestructura dominante.

El respeto de los privilegios locales manifestado por la reina en la carta de toma de posesión¹⁶, que garantizaban los intereses de los poderosos, y la satisfacción por la respuesta real a su reclamación¹⁷, identificando la donación con su persona "como una cosa conmigo", el ofrecimiento de nuevas garantías de no enajenación y una nueva confirmación de los privilegios, unido todo ello a la promesa de la consunción del señorío con la de la reina, fueron razones suficientes pa-

¹³ A. M. C. R., leg. 284, doc. 27b: No lleva fecha, pero del tenor del texto se deduce su inmediatez a la carta de donación de la ciudad, y nunca posterior al 10 de julio en que el rey da respuesta a sus peticiones.

¹⁴ Recuérdese que no aceptó la coronación de Enrique III y rindió homenaje al rey portugués, lo que le costó un largo asedio dirigido por el propio monarca castellano.

¹⁵ A. M. C. R., leg. 284, doc. 24:: Carta de donación: "... e retengo en toda vuestra vida para mí e para los reyes que después de mí faueren... en la dicha çibdaadd e su tierra, alcabaalas e terçias e pedidos e monedas e vaasallos e lançeros... e así mismo mineras de oro e plaata e otros metaleas e la mayoría de la justijica, e todas las otras cosas e cada una dellas que peratenesçen al señorío real".

¹⁶ La toma de posesión la realiza por poderes Ferrand García de Astorga, tesorero de la reina, una semana más tarde de la concesión de la merced real. A.M.C.R., leg. 284, doc. 25, Valladolid, 11 de mayo de 1.442.

¹⁷ Esta respuesta real es un documento despachado el 10 de julio de 1.442, que se encuentra incluido en un libro de autos sobre la posesión de la ciudad por el príncipe D. Enrique, fechado el 29 de junio de 1.445 y que se encuentra en el A.M.C.R., leg. 284, doc. 30.

ra aceptar pacíficamente una situación que dejaba las cosas como estaban para una élite dirigente que nada tenía que ver con unas rentas de las que estaban exentos.

Sólo cuando la reina falleció, el concejo se aprestó a recordar al rey su promesa de no enajenación, y su deseo de retornar a la condición realenga (A. M. C. R., leg. 284, doc. 27 a s/f)..

2.2. EL SEÑORÍO DEL PRÍNCIPE DON ENRIQUE

Intento vano, pues su suerte estaba echada desde varios meses antes de su muerte, en que el rey la había ofrecido a su hijo el príncipe D. Enrique, como parte del precio que hubo de pagar para ganar de nuevo su adhesión en la guerra que traía con los infantes de Aragón, con los que estaba coalligado. El artífice del acuerdo había sido Fray Lope Barrientos, que entre septiembre de 1.443 y marzo de 1.444 se dedicó a cumplir este cometido por encargo del rey (Suárez, 1.964: 178), culminando con la promesa de la entrega efectiva de Asturias y el acuerdo de donación de las ciudades de Jaén y Toro¹⁸, más como la de ésta presentara inconvenientes, la sustituye por las de Logroño y Ciudad Rodrigo, permuta que se produce unos meses más tarde, a mediados de Agosto, en otro momento bastante crítico, en que los infantes de Aragón tienen que ceder en sus posiciones ante el acoso de las tropas reales, situación ventajosa que es utilizada por D. Enrique para presionar a su padre, obligándole a confirmar las donaciones hechas meses atrás, y que el rey no tiene más remedio que aceptar en tan comprometida coyuntura¹⁹.

La reina murió y cuando la ciudad tuvo conocimiento de ello, le recordó al rey su deseo de retornar a la condición realenga. Parece que durante unos meses el príncipe no tuvo su posesión, ya que la vuelve a reclamar, obteniendo respuesta positiva. No podía ser de otra forma, pues esta reiterada exigencia de D. Enrique era el precio de una nueva reconciliación de alcance político suficiente para justificar la enajenación de varias ciudades²⁰.

La primera noticia oficial de la donación que conocemos lleva fecha del 18-Junio-1.445²¹, aunque de su contenido se desprende que la ciudad ya tenía conocimiento de la misma. Se hace en los mismos términos que a la difunta reina: doble garantía de la prohibición de su enajenación y de su condición realenga, asegurada por el destino de futuro rey que recaía en la persona del receptor, y para afirmación de su buena voluntad, confirma de nuevo sus privilegios.

¹⁸ A.M.C.R. , Leg. 284, doc. 29: Copia simple de carta del Sr. rey D. Juan, dada en Roa a 15-Agosto-1.444, confirmando otra dada en Tordesillas a 3 de marzo del mismo año, por la que hizo merced al príncipe D. Enrique de las ciudades de Jaén y Toro, pero en la confirmación expresa que las ciudadaes de Logroño y Ciudad Rodrigo fuesen en recompensa de la de Toro.

¹⁹ Suárez Fernández, L: *Historia de España* (H. E. R. M. P.). T. XV. Madrid, 1.964. Durante el asedio de la rebelde Peñafiel (Ag. de 1.444) D. Enrique se hace confirmar el principado de Asturias. Fechada en Roa a 15 de Agosto de 1.444 se produce la promesa de merced de Ciudad Rodrigo junto con Logroño en sustitución de la ciudad de Toro. A. M. C. R., leg. 284, doc. 28.

²⁰ Pérez Guzmán, H: *Crónica del Serenísimo Príncipe Don Juan, segundo deste nombre en Castilla y león*. Madrid, 1.953.. B.A. E., T. LXVIII. El acuerdo alcanzaba a las ciudades de Jaén, Logroño, Ciudad Real y la villa de Cáceres. El comportamiento inconstante de D. Enrique, colocándose de nuevo del lado del bando nobiliar tras la batalla de Olmedo, y el desequilibrio en la relación de fuerzas que ello supone, sitúa a Juan II en la disyuntiva de ceder a las presiones o aceptar la situación. Al decidirse por la primera opción, sacrifica varias ciudades. Pag. 631.

²¹ A.M.C.R., Leg. 284, doc. 30: Autos sobre la posesión de la ciudad por D. Enrique. Incluye carta de donación de Juan II pidiendo acatamiento a la donación. Medina de Rioseco.

La ilegalidad de la donación era manifiesta a tenor de los compromisos adquiridos anteriormente por el rey, que legitimaban a la ciudad para resistirse, lo que efectivamente sucede, aunque se trata de una resistencia pacífica, que utiliza la vía de la reclamación jurídica, recordando al rey su arbitrario proceder.

La resolución del conflicto adopta así un aspecto externo civilizado y respetuoso con la legalidad, confiando en la suprema razón de la ley; pero el rey no tenía otra opción, pues se trataba de un problema político y no jurídico, cuya solución menos mala pasaba por conculcar los derechos de la ciudad, si bien empleando un procedimiento respetuoso y cortés. La tentación de la fuerza está siempre ausente por ambas partes

A la petición real de acatamiento a la donación se suma un requerimiento de D. Enrique a través del licenciado Juan Fernández de Alcalá, oidor de la Audiencia Real, para que la reciba en su nombre²², el cual se presenta ante las puertas de la misma unos días más tarde, y en presencia de los dos alcaldes, algunos regidores, un escribano y un nutrido grupo de vecinos, hizo leer ambas misivas y el poder²³, solicitando a continuación la entrega de la ciudad, cuya respuesta se produce tres días más tarde (A. M. C. R., leg. 284, doc. 34), negándose a obedecer los requerimientos y esgrimiendo en todo momento su preciado privilegio de no enajenación.

Al fin la ciudad cede tras obtener como contrapartida de D. Enrique la confirmación de dicho privilegio (A. M. C. R., leg. 284, doc. 38. Segovia, 13 de Agosto de 1445), que equivalía a la garantía de la permanencia en la Corona, y la confirmación también de todos los demás privilegios que habían obtenido de los monarcas anteriores (A. M. C. R., leg. 284, doc. 38. Segovia, 13 de Agosto de 1445).

Estos privilegios significaban importantes beneficios para la ciudad en su conjunto, exenciones de pedidos y monedas, compromiso de no imponer más pechos, ventajas fiscales para los nuevos pobladores, garantía de no enajenación de terrenos comunales y de las rentas de propios, etc., pero de entre todos ellos dos buenas razones para ganarse la confianza de las minorías dirigentes: La confirmación de todos los oficios concejiles en los dos linajes, con la prohibición del acrecentamiento del número de regidores, y la garantía de no enviar justicia foránea, es decir, corregidores; con ello la nobleza local se aseguraba el monopolio del gobierno municipal y los mecanismos de acceso, reservados para sí, y ahuyentaba el temor de la presencia de una autoridad política y judicial superior, como ya había ocurrido durante el anterior señorío²⁴, lo que equivalía al control judicial, y por tanto, a mantener intacta su situación de dominación en la ciudad²⁵ (Mínguez, 1980: 219-30).

²² Ibi. Requerimiento de D. Enrique, expedido en Medina del Campo, con fecha 23 de Junio de 1.445.

²³ Ibi. El acontecimiento tiene lugar el 29 de junio en el arrabal de San Francisco, junto a la puerta del Conde.

²⁴ A.M.C.R., leg. 309, doc. 41, 21-Enero-1.445. Este documento hace mención a la existencia en Ciudad Rodrigo de un corregidor.

²⁵ Cáceres vivió una situación semejante, y aunque allí la resistencia fue mayor, la ulterior aceptación de D. Enrique se produjo cuando el grupo dirigente logró garantizar su situación de privilegio y mantenimiento de la situación establecida. Su comportamiento guarda un claro paralelismo con lo ocurrido en Ciudad Rodrigo, y demuestra que aunque se defiendan posiciones antagónicas, la alianza de clase es posible cuando se trata de defender intereses comunes.

Mínguez Fernández, J.M.: "La resistencia antiseñorial del concejo de Cáceres durante el siglo XV" *Norba*, II. 219-230; 1.980.

El mantenimiento del status quo, como ya ocurriera con el señorío de la reina, fue determinante en la aceptación del señorío del príncipe, una vez que los linajes dirigentes tuvieron la garantía de que tal circunstancia no suponía ningún peligro para la mengua de los resortes de su poder dentro de la ciudad. Sin embargo, dos años más tarde Don Enrique consiguió nombrar un corregidor sin perturbar la letra del privilegio, que le impedía nombrar justicia de fuera, con una inteligente sutileza, nombrando corregidor a un caballero de la ciudad, que ostentó tal cargo hasta un año antes de su coronación como rey.

2.3. EL TERCER SEÑORÍO: LA REINA DOÑA JUANA DE PORTUGAL

Como en su momento hizo su padre con él, tampoco Enrique IV cumplió el compromiso de no enajenación de la ciudad y la entregó a su esposa, la reina Doña Juana de Portugal, aunque de nuevo se trata de una donación dentro de la familia real, conjurando el peligro del destino que corrieron otras ciudades y villas del reino en momentos tan críticos de la historia castellana, como los que suceden a partir de la década de los sesenta, cuyo mejor testimonio nos lo ofrecen las quejas de los procuradores urbanos en las reuniones de Cortes²⁶ (Valdivieso, 1974: 54).

Esta enajenación supuso para la ciudad un seguro, y para su élite un negocio rentable; tal y como estaban las cosas en el reino, la ciudad infeudada a doña Juana era la mejor garantía de realengo, al quedar sustraída a la libre disposición del monarca y amparada frente a la avidez nobiliar. No es extraño, pues, que la ciudad aceptara de buen grado la donación, con el solo requisito de la confirmación de los privilegios por la reina, pues ello suponía para los linajes dirigentes recuperar un protagonismo, en cierto modo perdido por la presencia continuada de los corregidores, al desaparecer estos²⁷, siempre incómodos huéspedes, que podrían dificultar su arbitrario y abusivo comportamiento, como así fue. La rentabilidad de la operación no consistió exclusivamente en eludir la presencia del corregidor, evitan también la dependencia real y quedan sujetos a un frágil compromiso con la reina, que en la realidad se traduce en una independencia de actuación como no habían disfrutado nunca.

Desde al menos 1.463²⁸ el corregidor falta de la ciudad; este dato nos sitúa en la fecha más temprana conocida del señorío, en defecto del documento de confirmación. Entre este año y 1.469, el abuso se institucionaliza en el territorio de la ciudad como práctica generalizada. Este abuso procede de las esferas del poder local y sus círculos de allegados, y afecta desde el monopolio de la justicia²⁹, la usurpación de tierras y la implantación de jurisdicciones propias³⁰, hasta la ocupación de la mismas rentas señoriales, desatándose una auténtica anarquía, que obliga a la reina al nombramiento de un corregidor el año 1.469 para tratar de poner coto a tanto desmán, y singularmente para poder asegurarse el cobro de sus propias rentas³¹, lo que ni siquiera conseguía.

²⁶ Val Valdivieso, M.I. del.: "Resistencia al dominio señorial durante los últimos años del reinado de Enrique IV", *Hispania*, 126. 54 ss., (1.974).

²⁷ A.M.C.R., leg. 287, doc. 4, año 1.470: Hace referencia a la confirmación de los privilegios por la reina, se compromete a respetar su justicia de alcaldes de Villa y Fuero, y caso de ser necesario el corregidor, sólo se nombre por un año.

²⁸ A.M.C.R., leg. 289, doc. 46.

²⁹ En 1.465 eran alcaldes de Villa y Fuero dos regidores (A.M.C.R., leg. 286, doc. 38, fol. 22). En 1.467 lo era uno de los dos (Acuerdos Municipales II). La misma situación se daba en 1.470. (Leg. 287, doc. 4).

³⁰ A.M.C.R., leg. 297, doc. 15, año 1.484.

La conversión de la ciudad en señorío revistió las solemnidades inherentes a tal circunstancia y supuso la traslación de todas sus fidelidades y dependencias a la potestad señorial, aunque en la práctica se redujo simplemente a una fórmula para posibilitar la percepción de unas rentas con que mantener el aparato de la casa de la reina.

La voracidad de los poderosos alcanzó a las propias rentas señoriales, que fueron objeto de rapiña, hasta el punto de que en algún momento le fueron ocupadas todas³² y de poco valió el esfuerzo de la reina para asegurarse su cobranza, utilizando incluso el recurso del nombramiento de corregidores, puesto que su relación epistolar con la ciudad trata única y reiteradamente de este tema, con continuos requerimientos, que se repiten año tras año, conminando a los usurpadores al respeto de sus derechos³³.

Por lo expuesto se puede afirmar que este señorío significó un indudable beneficio para la clase dirigente de la ciudad, que supo aprovechar la anarquía reinante para incrementar sus propiedades y sus rentas y establecer unas relaciones sociales del más genuino contenido feudal, con la generalización de jurisdicciones privadas y la implantación de los malos usos³⁴.

Todavía volvió la ciudad a la condición señorial, aunque en situación bien distinta. Esta vez son los RR.CC. quienes la ceden a la princesa Doña Margarita de Austria, en un procedimiento del que desconocemos casi todo por falta de información.

En abril de 1.498 la princesa, siguiendo un uso habitual, confirma sus privilegios³⁵ a petición de la ciudad, como condición previa para su aceptación como señora, cuestión puramente formal, puesto que tácitamente el concejo ya había admitido tal situación, como lo prueba otro documento de fecha 8 de marzo, expedido por el propio concejo, donde se titula ya a la princesa por señora³⁶, y donde se reconoce el respeto al privilegio de la justicia tradicional de los alcaldes de Villa y Fuero, aunque ahora se sigue manteniendo la figura del corregidor.

El procedimiento y las condiciones son los mismos que en las anteriores donaciones, y por una interpretación analógica, probablemente también su contenido, a falta de mayor información.

3. EL MODELO SEÑORIAL

Las sucesivas donaciones, idénticas en cuanto a procedimiento y contenido, responden al tipo de señorío jurisdiccional, tan extendido y usado por los Trastámara como un instrumento de actuación política³⁷ (Moxó, 1975: 169-70).

³¹ A. M. C. R. leg. 287, doc. 4, año 1.470: Doña Juana nombra por corregidor a Ferrand Alvarez de Ferrara, su criado y maestresala, para devolver la paz a la zona, por cuanto tiene conocimiento de "ciertos crímenes e contiendas e maleficios, e ciertas tomas de maravedis... e de ciertos escándalos e movimientos...".

³² A. M. C. R., leg. 285, doc. 28-3, 17 de mayo de 1.470: "que non solamente vos a plaido a algunos de vosotros tomar e ocupar el dicho situado... más que antes aveys metido la mano e dado lugar a todo lo otro se tome e enbargue... en tal manera que todo quanto ende tengo e devo aver, ninguna cosa me queda".

³³ La única documentación que se conserva de este período relacionada con el señorío de la reina, es una serie de 5 cartas reclamando el respeto y el pago de sus rentas. Una de ellas s/f, y las demás de 17-Mayo-1.470, 30-Enero-1.472, 2-Enero-1.473 y 16-Abril-1.474.

³⁴ A.M.C.R., leg. 297, doc. 15, año 1.484. Este documento se refiere a esos años y habla de la instalación de horcas y de castigos corporales.

³⁵ A.M.C.R. leg. 285, doc. 9. Alcalá de Henares.

³⁶ A.M.C.R., leg. 287, doc. 81.

La designación de los oficios concejiles es competencia plena del concejo y está regulada de antiguo, desde el establecimiento del sistema de regimiento, aunque podemos acudir a la Sentencia del Condestable Ruy López Dávalos para encontrar un precedente más cercano³⁸ (Bernal, 1981: 89). A mayor abundamiento, esta facultad está recogida entre los privilegios de la ciudad, y ni se menciona en las cartas de donación. Los acuerdos entre los linajes para la distribución de los cargos le dan exclusiva competencia para tales nombramientos, y sólo en el caso de los regidores al rey incumbe la potestad formal de confirmar el nombramiento (Bernal, 1990: 268-283).

La administración de la justicia estaba en manos de los alcaldes de villa y fuero, de tradición foral, y del alguacil mayor. Su nombramiento sigue el mismo procedimiento que el de los regidores (Bernal, 1990: 284), aunque con la aparición del corregidor, pasaron a depender de él, y durante los periodos señoriales, estuvieron sujetos a su ratificación, por atañer al tema de la justicia, cuyo monopolio le quedaba confiado. Pero esto era la letra, porque la práctica era distinta, y no por conculcación de la prerrogativa señorial, sino porque los nombramientos recaían sobre las élites dirigentes, por lo que, sin desvirtuar la capacidad señorial, la administración de la justicia se quedaba en el círculo de dominación local³⁹.

Donde sí se hizo efectiva la facultad señorial de disponer de la administración de la justicia, fue en el nombramiento de los corregidores. Aunque ya en el reinado de Juan II este rey había enviado sucesivos corregidores a la ciudad (Barrios, y otros: Ob. Cit., doc: 73, año 1.414; 87, año 1.418; 90, año 1.419; 112 año 1.424; 124, año 1.426; 135, año 1.427; 173, año 1.434. 1.988), en algún momento indeterminado ésta había logrado añadir a sus privilegios la promesa real de no enviar justicia foránea, sin embargo, tenemos noticia de la existencia de un corregidor en 1.445. Don Enrique también confirmó ese mismo privilegio, pero en 1.447 nombra corregidor, con la oposición de la ciudad, que se mantiene hasta su coronación; también la reina Doña Juana envía corregidores desde 1.469 (Todos los datos sobre corregidores: Bernal Estévez, A: OB. Cit., pág. 258, ss. 1.990). a pesar de la confirmación del privilegio. En ambas ocasiones como consecuencia de disturbios que sirven de excusa a tales nombramientos, pero se ha de matizar, D. Enrique nombra

³⁷ Moxó, S. de: "Los señoríos. Estudio metodológico". *Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias Históricas*, II, Historia Medieval, Santiago de Compostela, 163-173.

Para un marco teórico sobre las modalidades del señorío; "Pero el más importante y común para la Baja Edad Media de los títulos señoriales para el ejercicio de la jurisdicción, está constituido por la merced sobre una villa o lugar ya organizado, que, con carácter de donación, otorgan los monarcas a determinados nobles que realizan un servicio relevante o que gozan del favor real...", p. 169-70.

³⁸ Bernal Estévez, A: *Ciudad Rodrigo en la Edad Media*. Salamanca, (1.981) y A.M.C.R., leg. 287, doc. 21a, año 1.401. Es la Sentencia del Condestable Ruy López Dávalos sobre el repartimiento de los oficios entre los linajes.

³⁹ Alcaldes: 1.445.- Alfonso Pacheco. Regidor

Gómez de Herrera. Hidalgo.

1.450.- Juan González. Regidor.

1.466.- Ferrand Pacheco. Regidor.

Nuño de Chaves. Regidor.

1.466.- Alonso Centeno. Regidor

Juan González. Regidor.

1.467.- Juan González. Regidor.

1.470.- Pero Pacheco. Regidor.

Alguacil mayor: 1.466.- Fernando de Silva. Regidor.

Bernal Estévez, A; Ob. Cit., pág. 284, ss. (1.990).

a Fernando de Silva, cabeza de una familia poderosa de la ciudad, y Doña Juana lo nombra con la misión principal de procurarse el cobro de sus rentas.

Referente a las facultades legislativas, solamente durante la época señorial de D. Enrique se observa cierto interés en intervenir en la vida de la ciudad (Bernal Estévez, 1990: 49)⁴⁰, los otros dos períodos muestran un vacío total de ordenamiento foráneo, quedando en manos del concejo esta potestad legislativa (A.M.C.R., Leg. 286: Libro Viejo de Ordenanzas).

Todo parece quedar reducido a poco más que al cobro de unas rentas, de las que desconocemos sus cuantías, pero no su naturaleza, ya que unas proceden de impuestos reales cedidos, de origen feudal, puramente residuales, y los demás son rentas y pechos de ámbito local, de los que han de deducirse las rentas de propios, capítulo de ingresos más sustancioso. A ello hay que unir las penas y calañas de carácter estrictamente judicial.

La monopolización de los oficios públicos por miembros de unas cuantas familias, la frecuente confusión entre cargos políticos y judiciales, concentrando todos los resortes locales de poder, y la exención de impuestos de que gozaban los grupos privilegiados de la ciudad, excluían a estas élites de los efectos del señorío, y como a través de los privilegios (Bernal Estévez, OB. Cot., 1990: 50) se aseguraban la no enajenación de los terrenos comunales y la ausencia de justicia exterior, quedaba el camino allanado a todo tipo de arbitrariedades (Bernal Estévez, Ob. Cit., 1990: 162-3)⁴¹. No es de extrañar que siendo antagónicos los intereses de las élites y los del común, y gozando aquellas de una situación de dominación respecto a éste, no plantearan reclamación alguna, más que una tímida respuesta legalista a una situación, que todo lo más representaba una simple tutela externa sobre la vida de la ciudad, pero que no atentaba contra los más directos intereses de la minoría dirigente.

Las características del señorío jurisdiccional, que externamente coinciden con las cartas de donación, se reducen en la práctica a un señorío tutelar y descafeinado, a medio camino entre la confluencia de los grandes intereses de la oligarquía ciudadana, del señor y del rey, y recayendo sus efectos sobre las masas pecheras, que sufren una explotación superior de carácter netamente feudal, al tener que satisfacer los intereses concomitantes de tres poderes superpuestos, que buscan la apropiación de sus excedentes económicos.

La identidad de la fórmula y contenido en las tres donaciones, y su similar finalidad, colocan a las sucesivas situaciones señoriales de la ciudad ante un mismo modelo, sólo variable en matices, dependiendo de la situación general del reino, que va desde una tutela más efectiva en el señorío de Don Enrique, a una relación más difusa en el de Doña Juana.

4. CONCLUSIÓN

— La condición señorial de la ciudad nunca estuvo desvinculada de la Corona Real.

— Presenta las características de un señorío jurisdiccional intermedio y tutelar:

En la escala de dependencia, el "señor" estuvo en la práctica mediatizado por el señorío real y el señorío colectivo del concejo.

No hay constancia en ningún momento de la presencia de agentes señoriales.

Esta tardía implantación del señorío vinculado a la Corona, unido a la larga tradición oligárquica de la ciudad, se tradujo en una disociación entre un mandamiento jurídico formal y una

⁴⁰ La actuación de D. Enrique es siempre positiva para la ciudad y se reduce a la confirmación de privilegios que ésta solicita.

⁴¹ Entre los usurpadores de tierras comunales, he registrado la activa presencia de las fuerzas vivas de la ciudad: Cabildo de la Catedral, algunos regidores y varios hidalgos.

distinta realidad práctica.

El resultado final fue el probablemente pretendido: dotar a los miembros de la familia real de unas rentas vitalicias, estables y bajo la fórmula jurídica que ofrecía mayores garantías.

— Su paso por el señorío no fue perjudicial, y en ocasiones resultó favorable, para los intereses de la oligarquía dominante.

-Sí supuso, en cambio, una sobreexplotación de índole feudal para el pueblo llano, que tuvo que soportar los gravámenes de tres estructuras señoriales superpuestas, aparte de las arbitrariedades en las que desembocó la quiebra de la justicia real.